

Michael Richard Pence  
Vicepresidente de los Estados Unidos de América  
La Casa Blanca  
1600 Pennsylvania Avenue NW  
Washington, DC 20500

10 abril 2018

Re: Asesinatos de líderes comunitarios en Colombia amenaza la seguridad y la estabilidad de la implementación del acuerdo de paz y las metas de política de los EE. UU.

Estimado Señor Vicepresidente:

Mientras se prepara para su visita a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú esta semana, lo instamos a que aborde el número asombrosamente alto de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos (DDH) en Colombia. Tragedias por derecho propio, estos asesinatos y abusos representan un grave riesgo al progreso de Colombia hacia la paz y la estabilidad, e incluso amenazan los esfuerzos antidrogas y la democracia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido un rol importante para asegurar la paz en Colombia y la inclusión del Capítulo Étnico, que garantiza los derechos de los grupos minoritarios en el acuerdo. Le instamos a que transmita un mensaje claro al presidente Juan Manuel Santos y a los funcionarios colombianos de que estos asesinatos afectan negativamente los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y Colombia.

**Desde el comienzo de 2018, en promedio, un líder comunitario o defensor de los derechos humanos ha sido asesinado cada 48 horas en Colombia.** El país tiene una de las tasas mundiales más altas de asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, y no ha habido justicia en más del 90 por ciento de estos casos. Las amenazas contra estos líderes socavan su capacidad para desempeñar una función vital de rendición de cuentas al documentar los abusos de derechos humanos relacionados a la corrupción y el tráfico ilícito. El debilitamiento de estas comunidades cede el paso a las fuerzas paramilitares, los narcotraficantes y los elementos corruptos de las fuerzas armadas colombianas, lo que en última instancia debilita la frágil paz de Colombia y más de 20 años de inversiones de los EE. UU. para lograr la seguridad y la estabilidad.

Se estima que 30 defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos dos meses y medio; un número desproporcionado de ellos son indígenas y afrocolombianos. En solo el mes de marzo de 2018, al menos diez activistas indígenas y afrocolombianos, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos fueron asesinados por su trabajo. La organización de sociedad civil Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), por ejemplo, ya ha perdido varios líderes por asesinatos y continúa siendo atacada. El ex líder de AFRODES Bernardo Cuero fue asesinado frente a su esposa en junio de 2017, a pesar de las peticiones internacionales del Congreso de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y otros, de que la Unidad de Protección Nacional (UNP) lo protegiera. Todo lo contrario ocurrió. La UNP en realidad retiró su protección a Cuero, quien posteriormente fue asesinado. El 23 de marzo, los hijos de Cuero, Silvio Duban Ortiz Ortiz y Javier Bernardo Cuero Ortiz, también fueron asesinados a tiros.

A pesar de la cantidad trágica de líderes sociales asesinados, es importante mantenerse optimistas sobre las posibilidades de paz. El histórico acuerdo de paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incluye múltiples cambios transformadores que abren la oportunidad para que Colombia aborde las causas fundamentales de la violencia, los conflictos y el narcotráfico. Si se implementan adecuadamente con el apoyo continuo de los EE. UU., estos acuerdos pueden servir para proteger a los líderes sociales y las organizaciones que se han quedado callados frente a la violencia y las amenazas y darles voz en la nueva democracia de Colombia.

Le pedimos respetuosamente que plantee los siguientes asuntos con el presidente Santos y lo instamos a que tome medidas para abordarlos:

- Los asesinatos constantes de líderes sociales, incluyendo a los líderes de afrocolombianos desplazados internamente que hacen parte de AFRODES y sus familiares, constituyen una grave amenaza para la paz y la estabilidad. Le pedimos instar al presidente Santos a garantizar justicia en estos casos.
- De conformidad con el Decreto 2078 de 7 de diciembre de 2017, así como con el Capítulo Étnico, el gobierno colombiano debe garantizar la inclusión de perspectivas étnicas y culturales en los planes de seguridad. Dos ejemplos prácticos serían la inclusión de guardias indígenas y cimarrones en la respuesta de protección y la capacitación de los miembros de las comunidades indígenas y las mujeres para que actúen como guardaespaldas del mecanismo de protección.
- Solicitar a las autoridades colombianas que aceleren la implementación sobre la base de medidas colectivas comprendidas en el Plan de Protección Colectiva (Resolución del Ministerio del Interior 1085 que incluye "infraestructura de apoyo, fortalecimiento organizacional y comunitario, mejora de la presencia de instituciones gubernamentales; medidas legales y administrativas, "nuevamente con un enfoque diferenciado de género y etnicidad).
- Instar al gobierno colombiano a dismantelar los grupos sucesores de los paramilitares, lo que incluye asegurar que la Unidad para el Desmantelamiento de Grupos Sucesores del Paramilitarismo funcione efectivamente.

La seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos para el pueblo colombiano está en los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y Colombia. La paz sostenible solo será posible cuando los líderes sociales colombianos puedan participar plenamente en el fortalecimiento de las instituciones y el estado de derecho del país.

Atentamente,

Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)  
AFRODES International  
Amazon Watch

Chicago Religious Leadership Network on Latin America  
Colombia Grassroots support  
Colombia Human Rights Committee  
Environmental Investigation Agency (EIA)  
Freedom House  
Grupo de Trabajo América Latina (LAWG)  
MADRE  
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office  
Movement for Peace in Colombia  
Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)  
Presbyterian Peace Fellowship  
Priority Africa Network, Oakland-SF Bay Area  
The Human Rights and Gender Justice (HRGJ) Clinic  
The International Institute on Race, Equality, and Human Rights (Race and Equality)  
UNIAFRO  
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

Andrew Morehouse  
Anthony Dest, PhD Candidate, University of Texas  
Catalina Martinez, Latin America Analyst - Forest Campaign, Environmental Investigation Agency  
Daniel Kovalik, Senior Associate General Counsel of the United Steelworkers, AFL-CIO  
Dr. Sheila Gruner, CESD, Algoma University  
Jonathan Fox, American University, School of International Service  
Joseph Jordan, Director, The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History  
Juan Rivera, Director Yoruba Cuba Association  
Michael Quintero, Assistant Professor of Musicology & Ethnomusicology, Latin American Studies, and African American Studies, Boston University  
The Rev. Barbara Gerlach, Retired Minister, Advocate for Colombia's Displaced Willie Baker, President Emeritus, Coalition of Black Trade Unionist (CBTU)

Cc: El Honorable John J. Sullivan, Subsecretario de Estado / Secretario de Estado interino  
El Honorable Kevin Whitaker Embajador de los Estados Unidos en Colombia